

Guillermo Lora

EL BAÑO
DE SANGRE
DE SAN JUAN

La Paz - Bolivia
1969

Ediciones

MASAS

EL BAÑO DE SANGRE DE SAN JUAN

Guillermo Lora

1. La resistencia obrera

La resistencia obrera y particularmente minera, a las medidas gubernamentales venía adquiriendo un enorme volumen masivo y comenzó a tornarse peligrosa para la estabilidad del gobierno militar. Era posible adelantar, partiendo de la experiencia pasada, que las autoridades del Poder Ejecutivo y de las fuerzas armadas descargarían un golpe preventivo con la finalidad de doblegar a los centros de trabajo más importantes. La resistencia obrera era, en cierta forma, una proyección del gran ascenso de masas que llegó a su punto culminante en 1964.

En febrero de 1967, Vicente Mendoza Nava, dirigente democristiano y Ministro de Trabajo, fue prácticamente expulsado del gobierno, esto porque ya había cumplido la sucia misión de imponer el famoso decreto de reordenamiento laboral y porque podía convertirse en obstáculo para la aplicación de una política de mano dura frente a los sindicatos. La democracia cristiana, que a veces asumió actitudes radicales, demostró ser un buen instrumento ocasional en manos de la burguesía. Mendoza Nava había prometido la solución favorable del pliego de peticiones presentado seis meses antes por los sindicatos legales¹. La medida tomada despóticamente por el general Barrientos disipó todas las ilusiones que hubiesen podido abrigar las organizaciones obreras acerca de una posible superación pacífica de los conflictos económicos y contribuyó a acentuar el repudio al gobierno de parte de los trabajadores de Siglo XX-Catavi. "Barrientos y compañía estaban resueltos a responder nuevamente con la violencia al pedido obrero de reposición salarial".

El anuncio oficial de estallido de las "guerrillas" (mes de marzo) paralizó a los mineros, eso según el testimonio de los observadores que se encontraban en los lugares de trabajo, pero gradualmente volvieron a centrar su atención alrededor de la lucha por sus intereses inmediatos.

En las asambleas generales habidas el 19 de abril y realizadas en el distrito de Siglo XX-Catavi, se aprobó la convocatoria a un Ampliado nacional minero en el que debían estar presentes otros sectores laborales (fabriles, constructores, etc.) y también los universitarios. Inicialmente se acordó realizar el Ampliado el primero de mayo en Siglo XX, resolución que fue revisada en la asamblea general de Huanuni de 6 de junio, a la que concurrieron delegados de Catavi, Siglo XX, Santa Fé, Morococala y San José. Los asambleístas acordaron los siguientes puntos:

- 1) Reposición de los salarios vigentes hasta mayo de 1965;
- 2) Reincorporación de los dirigentes y obreros de base retirados después de mayo de 1965;
- 3) Apoyo a las "guerrillas" con víveres y medicamentos ;
- 4) Ampliado de la Federación de Mineros a realizarse en el distrito de Catavi-Siglo XX el 24 de junio;
- 5) Marcha de unidad popular en Oruro el día 8 de junio.

Al día siguiente, 7 de junio, asambleas simultáneas en Catavi y Siglo XX aprobaron lo acordado en Huanuni. Mientras tanto, el 6 de junio, el gobierno decretó el estado de sitio, con la manifiesta intención de evitar la realización de la marcha de unidad en Oruro y del Ampliado anunciado para el 24 de junio. Si se tiene en cuenta que la Ley de Seguridad del Estado permitía a las autoridades reprimir "legalmente" todo brote de agitación social, se tiene que concluir que la dictación del estado de sitio estaba demostrando la decisión gubernamental de aplastar violentamente a la ola revolucionaria que comenzaba a encrespase amenazadoramente.

Poco antes los mineros rechazaron concurrir a la mesa redonda que había sido convocada por el Presidente Barrientos para estudiar los problemas de la minería nacionalizada, por considerar que concluiría en un nuevo engaño y apenas si sería una maniobra destinada a obstaculizar la lucha de los trabajadores por la reposición de salarios y otros beneficios sociales, que durante toda esta etapa se convirtió en la bandera central de la movilización de masas.

Algunas semanas antes la Comibol denunció la caída de los índices de producción como consecuencia de la agitación extremista y los perjuicios económicos que este hecho ocasionaba la empresa estatizada.

1- Max Reynolds, "Masacre de San Juan", en "Masas", La Paz, 1º de enero de 1969

Estaba ya decidido que el gobierno volvería a aplicar su receta de la oportuna sangría para que, como por milagro, subiese la producción.

2. Territorios libres

La represión gubernamental había vuelto a señalar a las minas como a su objetivo inmediato y cautelosamente fueron enviadas a los centros de trabajo las mejores tropas del ejército y de carabineros. Se magnificó lo que dijeron e hicieron los dirigentes mineros y se utilizaron todos los recursos propagandísticos imaginables para vincular la lucha de los mineros con las "guerrillas" del Sudeste, con la finalidad de establecer anticipadamente la justificación de la futura masacre que ya estaba decretada. El foco armado se preparó y estalló sin ninguna vinculación orgánica con el movimiento de masas.

La memorable asamblea de Huanuni declaró a las minas como territorios libres y se tuvo la impresión de que esta determinación fue la gota que colmó la medida. El gobierno sostuvo que la declaratoria de territorios libres le obligaba a volver a ocupar militarmente las minas. En tales declaraciones hay mucho de falsía. Lo cierto es que el slogan de territorio libre fue utilizado como pretexto para ejecutar la invasión armada. Las siguientes fueron las declaraciones hechas por el Presidente Barrientos después de la descomunal matanza:

*"Yo no estoy inventando una historia, el proceso subversivo se desarrolló en la siguiente forma: primero hubo reuniones agresivas en las cuales los participantes se declararon en favor de las guerrillas y recaudaron dinero para las mismas. Después vinieron las amenazas contra el poder constitucional. Más tarde, las radios de Huanuni, Catavi y Siglo XX, emitieron declaraciones y trataron de incitar al pueblo a derrocar al gobierno, para comenzar la lucha de clases e instalar un gobierno proletario. Últimamente, los rojos y los viejos líderes sindicales corrompidos declararon a las tres minas nacionalizadas más importantes territorio libre, donde nadie podría entrar sin su permiso. Debido a esto, el gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas que ocuparan las minas, para restablecer el orden y el principio de autoridad. Esto hubiera sucedido en cualquier país".*².

Durante los gobiernos movimientistas tanto los centros mineros como las universidades se declararon, una y otra vez, territorios libres y en la práctica funcionaron como tales, porque hasta ellos no ingresaban los organismos de represión e inclusive sirvieron de asilo a los opositores. El Poder Ejecutivo de ese entonces actuó como si no estuviese enterado de tales hechos, esto porque no les daba importancia o bien para evitar un enfrentamiento frontal y armado con los trabajadores. La declaratoria de territorio libre de una determinada zona constituye una vieja práctica en la lucha revolucionaria y no significa que se convierta en un Estado independiente, al menos desde el primer momento.

Al sitio siguió el apresamiento de dirigentes sindicales y políticos opositores, oficialmente sindicados de formar parte de la conspiración extremista. El ejército se encontraba apostado ya en las proximidades de Huanuni, Oruro, Playa Verde y Sora Sora, "con la orden de impedir el paso de los trabajadores a la ciudad de Oruro a cualquier precio".

Según la información proporcionada por Reynolds, el 8 de junio se encontraban en Huanuni los Sindicatos de Catavi y Siglo XX. Cuando los obreros se disponían a embarcarse en un tren de carga con dirección a Oruro, se informó que las tropas del ejército habían levantado cien metros de riel en Playa Verde y que alrededor de mil soldados ocupaban posiciones en la planicie: "El gobierno había ordenado no dejar pasar a los mineros a costa de cualquier cantidad de vidas. La masacre ya ordenada entonces se postergó hasta el 24 del mismo mes".

Los mineros, pese a los informes alarmantes que recibieron, se mostraron dispuestos a marchar sobre Oruro e incluso a enfrentarse con el ejército. Los dirigentes sindicales se opusieron terminantemente a la proyectada marcha, con el argumento de que las tropas asesinarían a los mineros, explicación que estuvo lejos de convencer a las bases. Como tantas otras veces, fue evidente la ruptura entre los obreros y sus dirigentes. Después de una larga y encendida discusión se resolvió realizar la que debía ser la "marcha de la unidad" en Huanuni y no en Oruro y se ratificó el 24 de junio como fecha de la realización del ampliado, el apoyo al movimiento foquista a través del aporte de medio salario diario por trabajador. Al anoecer de ese día los manifestantes retornaron a sus distritos.

2- Rubén Vásquez Díaz, "Bolivia a la hora del Che", México, 1968.

3. La masacre

Del 9 al 23 de junio la tarea de los dirigentes se circunscribió a preparar el Ampliado Minero, que venía proyectándose como una reunión de varios sectores (fabriles y universitarios aseguraron su asistencia). El objetivo de la actividad represiva gubernamental era por demás concreto: evitar por todos los medios la realización del anunciado Ampliado, porque había el peligro de que en esa reunión se pusiese en pie un poderoso comando del ascendente movimiento revolucionario. Durante estas jornadas Siglo XX y Catavi, de un modo natural, volvieron a jugar el papel de dirección nacional del movimiento obrero.

En vísperas de la masacre llegaron al distrito de Catavi decenas de agentes del DIC, destacados desde La Paz, con la misión de apresara los dirigentes obreros. Circularon rumores alarmantes en sentido de que se pretendía eliminar físicamente a Isaac Camacho, que estaba actuando clandestinamente, a Reyes, a Chacón, a la sazón Secretario General del Sindicato de Siglo XX, y a Valle, este último notorio líder porista del interior de la mina. Los obreros aguzan su vigilancia en ese ambiente electrizado. Cirilo Valle murió más tarde en la región de Cochabamba cuando se desempeñaba como obrero caminero.

La zozobra creció cuando los trabajadores se dieron cuenta que el día 21 el gerente Sahonero (compadre de Barrientos, según el rumor popular) abordó una avioneta de la fuerza aérea para trasladarse a La Paz, de donde retornó al día siguiente. Se dijo que el director técnico de la empresa ultimó con el general Barrientos los detalles del inminente ingreso de las tropas del ejército a los campamentos. "El acompañante del gerente Sahonero fue el actual Superintendente, Carlos del Pozo, puesto creado gracias al favor político y que en la práctica tenía a su cargo la dirección de operaciones de los agentes de policía".

El Secretario de Relaciones de la FSTMB proporcionó la información que sigue: "El día 23, en las primeras horas de la noche, comenzaron a llegar algunas delegaciones fraternales, como fabriles de Oruro y Cochabamba invitados al ampliado minero. Sorteando la persecución sistemática nos constituimos con anticipación para el verificativo del ampliado en representación de la FSTMB. Correspondió al Secretario de Relaciones que suscribe esta información adoptar las medidas de organización para el examen democrático de los problemas".

Los militantes poristas proporcionaron datos más amplios y según ellos arribaron ese día a Siglo XX gran parte de las delegaciones mineras, representantes fabriles de Santa Cruz, además de los indicados más arriba, y los universitarios paceños. Mientras tanto, los obreros se disponían a festejar, como siempre lo hacen cada año, la noche de San Juan, festividad tradicional en el campo, los centros mineros y hasta en las ciudades; para el grueso de las gentes los demás problemas (sindicales y políticos) pasaron a segundo plano.

Poco antes, los trabajadores en asamblea acordaron un pacto político-sindical con los partidos de izquierda (POR, los dos partidos comunistas, PRIN y MNR). Una de las finalidades de este frente era la de luchar por la defensa de los sindicatos y la reposición de sueldos y salarios. Los partidos que intervinieron en el pacto se comprometieron a realizar guardia en el local del sindicato de Siglo XX. En la noche de San Juan le correspondió el turno al Partido Comunista pro-Moscú, lo que explica que uno de sus dirigentes fuese fusilado por las tropas invasoras.

A las ocho de la noche Siglo XX y Catavi cambiaron totalmente de aspecto, a la tremenda tensión social siguió el ambiente de fiesta. Las fogatas agigantaban las sombras de los hombres y de las edificaciones chatas.

"Dos días después de que el Presidente René Barrientos dijo a la nación que había sostenido conversaciones satisfactorias con los representantes de los mineros, el choque más serio que se haya producido en los últimos años tuvo lugar entre esos mismos mineros y las Fuerzas Armadas Bolivianas, el sábado 24 de junio" (R. Vásquez Díaz).

Sin que los obreros en fiesta se pudiesen enterar, fracciones del regimiento Rangers ocuparon los dispersos campamentos de Siglo XX. A los pocos minutos las tropas se desplazaron hacia la Plaza del Minero, dominada por un monumento, el local sindical de piedra, donde funcionaba la notable radioemisora "La Voz del Minero".



Velorio en el club deportivo "Racing" de Siglo XX

Cobra singular interés la crónica publicada por "La Patria" sobre estos acontecimientos: "a las 4 y 55 de ayer, las poblaciones mineras de esta zona, amanecieron con un intenso tiroteo. Se escucharon disparos de fusiles, ametralladoras y explosiones de dinamita, cuando las fuerzas del ejército y de la Policía Minera ocupaban los campamentos mineros en sangrienta acción"³. El matutino orureño describió la ocupación del distrito de Catavi: "Las fracciones del Regimiento Rangers y de la Policía Minera descendieron por las faldas del cerro San Miguel, con intermitentes disparos, que continuaron hasta las 6 y 30 horas. Las mayores víctimas se registraron en el campamento denominado "La Salvadora" cerca de la estación (ferroviaria) de Cancañiri".

Los obreros fueron sorprendidos por un nutrido tiroteo en la zona de "La Salvadora" y Llallagua y, en los primeros momentos, pensaron que se trataba de dinamitazos y de disparos de armas de fuego que siempre se producen en festividades similares. Las detonaciones cobraban mayor volumen cada minuto que pasaba y corrió velozmente, como una estremecedora descarga eléctrica, la noticia sobre la presencia de tropas del ejército en los campamentos. No se dejaron esperar las lamentaciones de los heridos y los gritos desesperados de las mujeres y niños. Las balas cruzaban en todas direcciones y ya no era posible dudar de que las fuerzas armadas habían ingresado en tren de combate. Sólo a esta altura los trabajadores lograron reponerse de la sorpresa, pero, como es lógico suponer, no tuvieron tiempo para oponer resistencia ordenada a los invasores. Los franco tiradores ocuparon el lugar de la acción coordinada de los obreros.

A pesar de todo, los datos de "La Patria" resultaron fragmentarios. Las tropas habían desembarcado a unos dos kilómetros de la estación de Cancañiri, precaución elemental que les permitió filtrarse sigilosamente hasta el corazón mismo de Siglo XX, a fin de evitar que los mineros tuviesen tiempo para organizarse. Los soldados se descolgaron por la zona de "La Salvadora" y también por el campamento llamado Villarroel, ubicado en una hondonada. Las fracciones de carabineros y de agentes civiles avanzaron por Llallagua hacia los campamentos. Esta operación envolvente y sorpresiva (preciso es subrayar que se ejecutó sin tener que vencer la menor resistencia) buscaba, al cerrarse, atenazar al local sindical, que a las seis de la mañana ya estaba en poder del ejército.

"Los soldados al ingresar al local sindical asesinaron a Rosendo García. Al clarear el día se pudo observar que la mayoría de muertos y heridos eran moradores del campamento "La Salvadora" que se dirigían al trabajo para cumplir la primera punta. Los invasores disparaban contra toda persona que trataba de escapar. A las seis y treinta el ejército era dueño de todo Siglo XX; el sindicato apareció ocupado y rodeado de uniformados. En los lugares estratégicos se veía la boca de las ametralladoras. Las sirenas de las ambulancias hacían estremecer el ambiente y los centenares de heridos y decenas de muertos eran recogidos y llevados a Catavi. La única reacción de los mineros fue de huir a las bocaminas, allí se hizo un recuento de lo sucedido. En la tarde muchos cadáveres estaban tendidos en el local de! Club Racing" (Reynolds).

Inicialmente se dijo que fueron muertos 16 mineros y heridos unos 71, pero "La Patria" del 2 de junio subió el número de occisos a veinte: "De acuerdo a la lista oficial recogida ayer en Siglo XX, la lista de muertos es la siguiente:

- Ponciano Mamani
- Alejandro Mamani
- García Maisman
- Nicanor Tórrez
- Barroso, Sección Azul
- Maximiliano Achu, Sección Siglo XX
- Isaac Casorla, venerista
- Bernardino Condori, niño de ocho años
- una señora en estado de gravidez
- un joven de 13 a 14 años, una criatura de horas de nacimiento
- un obrero de 29 a 30 años, herido en la cabeza
- un obrero muerto por el impacto de proyectil en la cabeza
- un joven de 22 a 25 años
- Gabriel Sequeiros de la "Guardia Nacional"

3- "La Patria", Oruro, 25 de junio de 1967

Está demás decir que las informaciones oficiales se esforzaron por disminuir el número de víctimas. Muchos heridos no fueron al hospital y algunos obreros simplemente desaparecieron, sin que se hubiese podido establecer con exactitud la suerte corrida por ellos.

La prensa orureña creyó de su deber dejar sentado que no se produjeron "enfrentamientos de grandes proporciones, pero hubo fricción en el local del sindicato. Los mineros se encontraban festejando las fiestas de San Juan". Los trabajadores no se engañaron acerca del objetivo buscado por los invasores: "El propósito del ejército era hacer fracasar el Ampliado Minero pero para ello no tuvieron por qué enfrentarse y ofrendar tantas vidas, y sólo se ha conseguido consolidar la unión de los trabajadores, se indicó" (Reynolds)

El día 25 se efectuó el entierro de los obreros cobardemente asesinados. El acto se transformó en un grandioso mitin de repudio al gobierno y al ejército. Asistieron cerca de treinta mil personas enfurecidas, que vehementemente protestaban por la nueva masacre. Tiene que admirar que inmediatamente después de una colosal sangría los trabajadores ganasen tan impetuosamente las calles para seguir luchando. Todos los moradores del distrito conocían el menor detalle de lo ocurrido gracias al dramático relato que de los luctuosos acontecimientos hizo la radio católica Pío XII el día 24.

4. Emergencias de la masacre

Como quiera que no tuvo lugar una batalla frontal entre los efectivos obreros y militares no se registró un inmediato retroceso de los sindicalizados.

Tras la ocupación, el distrito minero de Siglo XX y las zonas circunvecinas fueron declaradas zonas militares, medida que sobrevivió al mismo general Barrientos. Se procedió así para consumar una rigurosa purga en las filas obreras, para apresar a todo sospechoso y para colocar un cordón sanitario alrededor de la mina más grande del país (Siglo XX). "La corriente eléctrica fue cortada de tal modo que ayer no funcionaron los servicios telegráficos y los de transporte fueron suspendidos. Se ha intensificado la vigilancia en las carreteras, con grupos de soldados del ejército y en una que otra tranca cooperados por funcionarios del DIC. Este servicio de vigilancia impidió que nuestros reporteros pudieran pasar con el vehículo que ocupaban al distrito de Huanuni, ya que las fracciones que controlaban la tranca indicaron que sólo obedecen una autorización del Comando de la II División del Ejército para viajar a la zona convulsionada. Desde las 9 de la mañana de ayer, varios aviones militares sobrevolaron Siglo XX y Catavi, con la consiguiente alarma de los pobladores,. Varios de estos aparatos siguieron sobrevolando hasta pasado el mediodía. Circularon rumores de que éstos bombardearon los dos distritos mineros, aunque estas versiones no pudieron ser confirmadas" (La Patria).

"El Diario" (La Paz) de 25 de junio transcribe una información proporcionada por el Comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Belmonte Ardiles, en sentido de que "el propósito de las Fuerzas Armadas era tomar por sorpresa los centros mineros, apresar a los dirigentes y normalizar las actividades en los campamentos de Comibol".

Parece que efectivamente el proyecto original era ejecutar un golpe sorpresivo sobre Siglo XX y Huanuni, en ese momento considerados como los núcleos obreros más explosivos, que les permitiese apoderarse de los locales sindicales, destruir las radioemisoras (las autoridades denunciaban diariamente que se habían dedicado a propalar falsedades y mensaje subversivos, bajo la inspiración del Che Guevara) y apresar a los dirigentes y trabajadores que habían sido catalogados por los servicios de inteligencia como peligrosos activistas tanto en el campo sindical como político. En los medios castrenses esta operación fue bautizada con el nombre de "Plan Pingüino". Las declaraciones oficiales y militares tenían como denominador común la especie de que la ocupación de las minas evitó que una mayor cantidad de mineros muriesen como consecuencia de la subversión extremista, que la consideraban inevitable.

La opinión pública quedó horrorizada ante la descomunal masacre y no se dio cuenta de la purga de grandes proporciones que tuvo lugar en los centros mineros. El día 26 de junio por la noche, soldados y agentes civiles se dieron a la tarea de rodear los domicilios de innumerables trabajadores que fueron apresados sin que mediase formalidad alguna. A algunos se los atrapó en las mismas bocaminas, ciento cincuenta obreros que vestían sus gruesas ropas de trabajo fueron enviados a los campos de concentración que funcionaban en el corazón mismo de la selva tropical, otros acabaron encarcelados y, finalmente,

enjuiciados criminalmente por delitos ideados por los fiscales.

En Siglo XX las tropas tuvieron, para poder cumplir su misión represiva, que reducir previamente la resistencia opuesta por los trabajadores. Al asesinato colectivo siguió un régimen de terror sin paralelo y que continuó por mucho tiempo. La oposición al gorilismo no fue quebrada del todo y adquirió las modalidades más insospechadas.

El 26 estalló la huelga general del nivel 411 del interior de la mina. Los obreros no encontraron ningún otro medio que les permitiese expresar su repudio a la política gubernamental. Al día siguiente tuvo lugar, en el mismo paraje, una nueva asamblea a la que lograron llegar algunos altos dirigentes sindicales. Fue faccionada la lista de los obreros apresados y confinados, se acordó mantener la huelga y se efectuaron cambios en la dirección de la FSTMB: Simón Reyes fue designado Secretario General e Isaac Camacho de Relaciones, nadie dudaba (desgraciadamente tampoco las autoridades) que en ese momento este último era el caudillo más valeroso y que, por esto mismo, constituía el mayor peligro para el gobierno antiobrero. En este momento de aguda crisis para el movimiento obrero, las bases marginaron de la Federación a Irineo Pimentel. La prensa publicó los acuerdos más importantes:

- 1) Retiro inmediato de las tropas del ejército de los distritos mineros. A fin de evitar choques más serios y de consecuencias imprevistas.
- 2) Devolución a la organización obrera las llaves del local sindical y de la radio "La Voz del Minero".
- 3) Libertad inmediata de los dirigentes y obreros apresados y confinados.
- 4) Pago por Comibol de las sumas adeudadas a los trabajadores desde mayo de 1965, para que los familiares de los mineros puedan emigrar a las ciudades donde sus vidas puedan estar a salvo.
- 5) Cuarenta y ocho horas de huelga general.
- 6) Persistir en el frente conformado con los partidos de izquierda, como una forma de fortalecer al movimiento obrero.
- 7) Cuota quincenal de diez pesos por obrero para solventar los gastos del sindicato y adquirir armas.
- 8) Indemnización por parte del gobierno a los familiares de los obreros muertos y heridos.
- 9) Los obreros garantizarán las actividades de los técnicos en los centros de trabajo.
- 10) Apoyo a los dirigentes sindicales y exigencia de que las autoridades respeten el cumplimiento de sus funciones.

Los comisionados de las bases entregaron el anterior pliego al coronel A. Villalpando, jefe de la zona militar y con asiento en Catavi. Después de una conversación de dos horas y media no se llegó a ningún resultado fructífero. "Después de la reunión, el coronel de los rangers dijo a la prensa que sus tropas rehusarían abandonar la zona y que su presencia en la región minera tenía un carácter pacífico" (Vásquez D.).

El 30 de junio se organiza el Comité de Huelga encabezado por Berríos y Córdoba (este último elemento de la ORIT, según G. Lora), los mismos que inician las negociaciones con las autoridades gubernamentales. El documento que puso fin al conflicto es por demás humillante. Se impusieron todas las condiciones ordenadas por el régimen Barrientos-Ovando. En julio fueron apresados Isaac Camacho y René Chacón. Este último comenzó como socialcristiano, pero bien pronto fue obligado por las bases a colocarse frente al gobierno. Más tarde cayó también Simón Reyes. La liquidación física, aunque momentánea, de los sindicatos, obligó a una docena de dirigentes a permanecer hasta fines de 1968 en el Panóptico Nacional de La Paz. El gobierno fue desconociendo y persiguiendo a todo elemento que tuvo la debilidad de aceptar cargos sindicales, no soportó ni siquiera a quienes podían acomodarse a sus intereses. De esta manera fue cerrada la posibilidad de existencia de los sindicatos legales. El totalitarismo se mostró incompatible con las organizaciones obreras libres.

En Huanuni la Operación Pingüino de San Juan comenzó siendo ejecutada incruentamente, pues sólo algunas horas después, cuando se procedía a la destrucción de la Radio Nacional, cayeron los primeros heridos y un obrero muerto.

“Efectivos del ejército ingresaron la noche del lunes (26 de junio, horas 22) a Huanuni, desmantelaron Radio Nacional de ese distrito minero y se llevaron presos aproximadamente a cuarenta personas”⁴.

Tardíamente el gobierno descubrió una nueva justificación de la masacre. Se dijo que los extremistas de Siglo XX tenían proyectado asaltar el cuartel de Lagunillas para desarmar a los soldados; todo esto como parte de un complot subversivo. La ocupación militar de las minas habría buscado evitar la consumación de este atentado.

5. El foquismo y la represión

Desde la aparición del movimiento foquista en Ñancahuazú, los servicios de inteligencia del Ministerio de Gobierno y del ejército quedaron supeditados a la CIA norteamericana, que seguramente tuvo a su cargo la elaboración de gran parte de los planes de la ocupación militar de las minas y su misma ejecución.

A la operación se le asignó el objetivo central de erradicar del escenario a todo activista político y sindical. Es por esto que la represión se extendió también a las ciudades, donde fueron aprehendidos los principales dirigentes mineros.

En la primera página de “Presencia” de primero de agosto apareció un recuadro de una columna con el título de “Líder minero del POR apresado”, La noticia se refería a la captura de Isaac Camacho, que en los momentos más difíciles supo colocarse a la cabeza de los trabajadores e inició la organización clandestina de los sindicatos como la única forma de burlar la feroz represión gubernamental. Camacho logró salir de Siglo XX después de la carnicería de San Juan y gran parte de la resistencia al gobierno militar fue obra suya.

Cuando retornó clandestinamente al distrito de Catavi, su escondite en Llallagua fue ubicado por la policía, seguramente gracias a una delación. Las fuerzas represivas arrojaron una bomba a la casa donde se encontraba y lo sacaron en camilla pensando que estaba muerto. Con seguridad que ya en ese entonces se buscaba asesinarlo. Con todo, el dirigente sindical y porista logró salir con vida e inmediatamente se vio sometido a un régimen de tortura, se le querían arrancar confesiones acerca del lugar donde habían sido escondidas las armas de los mineros, etc. Con posterioridad dijo el Ministro de Gobierno, Antonio Arguedas, -que entonces oficiaba de perdonavidas y de jurado enemigo de la izquierda-, que el “líder minero” fue desterrado a la Argentina el 9 de agosto. Su Partido, después de haber hecho minuciosas investigaciones en los posibles lugares en los que podía encontrarse, llegó a la conclusión de que fue asesinado por órdenes de la CIA y seguramente en manos de Arguedas. Algunos días antes de la captura de Camacho cayó preso en Oruro el dirigente Chacón, que por suerte fue inmediatamente conducido a la cárcel. La leyenda acerca del peregrinaje del dirigente minero por el exterior fue ideada por el gobierno y por Arguedas para ocultar su crimen.

La cacería de los revolucionarios continuó a lo largo del país. En Siglo XX muchos sindicalistas fueron perseguidos a bala en plena vía pública, pensando que así se verían obligados a abandonar el distrito. Citemos el caso de Pastor Peláez, porista, viejo obrero y dirigente sindical a quien se le hicieron disparos de arma de fuego en la misma plaza de Llallagua. Peláez, como algunos otros, sobrevivieron a la tremenda noche de terror, demostrando de esta manera su gran temple revolucionario.

Como un anticipo de esta descomunal cacería de brujas fueron apresados, a mediados de enero de 1967, dirigentes políticos de izquierda y enviados a la jungla del Noreste, más tarde se los acusará de ser autores del estallido de las “guerrillas” e incluso de los sucesos de San Juan. Entre los confinados se encontraban Guillermo y Miguel Lora.

Los trabajadores, muy especialmente los mineros, demostraron no estar dispuestos a agachar la cabeza

4- “Presencia”, La Paz, 28 de junio de 1967.

frente a la prepotencia gubernamental. Los obreros de San José, Huanuni, Siglo XX y la semi-clandestina COB, respondieron con un paro de 24 horas a la dictación del estado de sitio. Las organizaciones laborales siguieron fustigando duramente al régimen calificado por ellas como. entreguista y antiobrero. Las autoridades llegaron al convencimiento de que, debían extremar aún más las medidas represivas. En Oruro, en la tarde del mismo día 6 de junio, se realizó una belicosa manifestación de protesta, al día siguiente y muy dificultosamente pudo restablecerse el orden.

El gobierno estaba interesado en demostrar que los "extremistas" habían incluido en su plan actividades terroristas que debían desembocar en una insurrección. El país quedó sorprendido cuando la prensa del 10 de junio informó que el día anterior fue asaltado y destruido el local del DIC de Llalagua. En un comienzo los medios oficiales dijeron que los autores eran "grupos juveniles que se dedicaron al saqueo"; a esta presunta explicación demasiado abstracta siguió, al día siguiente, la especie de que los ejecutores del atentado eran militantes extremistas y, entre otros, se citó a Chacón, Secretario General del Sindicato, y al porista Cirilo Valle. No puede haber la menor duda de que con estas mentiras se pretendía convencer a la opinión pública que el complot fraguado por el Ejecutivo correspondía a la realidad.

El estado de sitio no logró contener la arremetida obrera y menos hacerla retroceder; contrariamente, obligó a imprimir mayor energía a la movilización masiva y a afinar la coordinación de las actividades obrero-estudiantiles con la de los otros sectores populares, tras el objetivo de libertar a los presos políticos y rechazar los atropellos de las autoridades.

La lucha por el retorno a las garantías democráticas y sindicales estaba inconfundiblemente timoneada por el proletariado.

A la masacre de San Juan siguió -como tenemos indicado- la huelga general de mineros que duró diez y seis días y una impetuosa ola de protestas, en la que jugaron un papel importante los estudiantes. El 27 de junio la universidad paceña fue declarada territorio libre y asilo de los perseguidos políticos. En el voto resolutivo que fue lanzado al respecto se señaló como enemigos del pueblo a los generales Barrientos y Ovando. Un franco espíritu de desafío alentaba la medida, sobre todo si se tiene en cuenta que siguió a la sangrienta represión del 24 de junio. El cabildo abierto convocado por los estudiantes contribuyó en mucho a acelerar la lucha revolucionaria. Barrientos se vio obligado a sostener, en uno de sus innumerables discursos, que su misión era la de libertar a los estudiantes de la nefasta influencia del castro-comunismo. El Ministro de Gobierno Arguedas, haciendo gala de cinismo, aseguró que en la UMSA los opositores habían almacenado armas para hacer posible la subversión. El despropósito fue enérgicamente respondido por la FUL paceña, cuya declaración registraron los periódicos del 30 de junio. En dicho documento se decía que no habían armas en la universidad; que ésta no provocaba y que no existían "condiciones para aceptar la invitación del Presidente Barrientos para abrir un diálogo en procura de la pacificación nacional". El gobierno dio pruebas suficientes que confirmaban la tesis de que el próximo objetivo era la universidad y toda la campaña de provocaciones que puso en práctica buscaba por lo menos hacer retroceder a los belicosos y bullangueros estudiantes. Los hechos enseñan que esto no se pudo lograr porque los jóvenes continuaron siendo los dueños de las calles, incluso después de las innumerables derrotas sindicales. Nadie podía dudar que las autoridades habían decidido ampliar el ámbito de su acción represiva, extremo que se evidenció por la afirmación del señor Arguedas en sentido de que "no habrá fuero para los subvertores". La movilización popular se convirtió en la mejor defensa de la universidad.

6. Plataforma de la Resistencia

El movimiento revolucionario de las ciudades se vio fortalecido por la terca persistencia de los mineros en la batalla, que continuaron deliberando en el interior de los socavones para poder señalar los mejores métodos de lucha y el camino de la fusión de los movimientos sindical y político. Las noticias propaladas por el oficialismo hicieron saber que las asambleas en el subsuelo se realizaban bajo el control de Isaac Camacho, Chacón y Reyes. Se explica que la captura de estos elementos fuese especialmente recomendada por la DIC. Las resoluciones adoptadas por los mineros adquirieron mucha importancia, tanto porque señalaban con anticipación el camino que debía recorrer el movimiento revolucionario como porque la dirección nacional volvió a concentrarse en Siglo XX, el núcleo obrero más maduro, políticamente hablando. Se acordó constituir un Comité Nacional clandestino, afirmar y generalizar los pactos intersindicales, además de persistir en el frente de izquierdas. Muchos de estos



Masacre de San Juan en Siglo XX

puntos no pudieron cumplirse debido al apresamiento de los principales dirigentes y porque no se tomaron las providencias necesarias para que continuasen funcionando las comisiones clandestinas.

El 29 de junio, en Huanuni, al concluir el paro de 24 horas, se organizó una comisión de bases encargada de tramitar el retiro de las tropas del ejército, la libertad de los presos y la indemnización de los deudos de las víctimas del día 24. Esta especie de programa será esgrimido por los obreros una y otra vez en los meses y años próximos. Los contactos con las autoridades se establecieron por intermedio de los obispos de Oruro y Potosí, que actuaron como mediadores.

Todavía en junio de 1969 una asamblea de los obreros del Sindicato Central de Trabajadores de la Empresa Minera Unificada de Potosí acordó, entre otros puntos, exigir el cumplimiento de las siguientes demandas:

“Repliegue de las Fuerzas Armadas a sus respectivos cuarteles, dejando los centros mineros en los que se encuentran y que se confabulan contra la tranquilidad de los hogares mineros,

“Abolición de la Policía Minera por ser este organismo de represión y una carga económica para la Comibol y los trabajadores.

“Retorno al trabajo de los obreros retirados por causas sindicales y políticas.

“Pago de indemnizaciones a los trabajadores que sufrieron rebaja de sueldos y jornales el año 1965 y que indebidamente retiene Comibol.

“Aumento de sueldos y jornales y reajuste de precios de contratos en sus diferentes sistemas.

“Devolución de nuestras emisoras con sus equipos de ondas larga y corta”.

Por la misma época los mineros desocupados de Huanuni amenazaron con recurrir a la huelga de hambre a fin de poder ser admitidos de nuevo en la empresa.

El gobierno castrense siempre se esforzó por aparecer como popular. Se fraguaron votos de aplauso por la ocupación de las minas. Organizaciones fantasmas y presuntas federaciones campesinas, que proliferaron a la sombra del poder, se apresuraron a emitir comunicados; pero, todo esto no fue suficiente para ocultar la creciente impopularidad del régimen. El Presidente Barrientos pareció adquirir conciencia de este hecho cuando en su conferencia de prensa del primero de julio dijo: “en las minas se conoce mal mi figura”.

El pueblo no se contentó con sindicarse al Presidente como autor directo del asesinato de los trabajadores, sino que subrayó el papel jugado por Ovando y por la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas en esos crímenes. No se dejó esperar la respuesta del gorilismo.

El Comandante de las Fuerzas Armadas (general Ovando) proporcionó, el 30 de junio, amplias informaciones a la prensa, cosa desusada en él. El astuto jefe salió a la palestra para justificar cuidadosamente la ocupación de las minas, esgrimiendo como argumento principal la tesis de que el sindicalismo se había ligado peligrosamente con las guerrillas de inspiración internacional y dirigidas por el Che Guevara ⁵.

La segunda reunión del Alto Mando de las Fuerzas Armadas emitió un sugerente comunicado con fecha 20 de julio y que buscaba demostrar la estrecha vinculación de las guerrillas, “organizadas por el castrismo” con la llamada “conmoción en las minas sistemáticamente preparada desde muchos meses atrás por los mercenarios al servicio de la aventura castrista”. El objetivo del documento (en el que parecieron coincidir accidentalmente Barrientos y Ovando) fue presentar como parte de la actividad castrista o guerrillera a “las agitaciones y otras en gestación”. El oficialismo partía de la evidencia que no había sido suficiente la matanza de San Juan, tipificada como acto encaminado a defender el orden público según mandato constitucional. Ni duda cabe que fue sellado un efímero entendimiento de mutua defensa entre Barrientos y Ovando, para poder hacer frente exitosamente a la oposición que volvió a tornarse amenazante y que tenía como común denominador el antimilitarismo. Hipócritamente los generales se presentaron como

5- “Presencia”, La Paz, 1 de julio de 1967.

los más interesados en el esclarecimiento, de los luctuosos sucesos de Siglo XX y Huanuni. El documento del ejército decía: "En resguardo del prestigio de las Fuerzas Armadas, el gobierno pedirá y pide al Honorable Congreso Nacional el acta de la interpelación sin demagogia para que se esclarezca la verdad y se deslinden responsabilidades ante la conciencia del pueblo, debiendo aplicarse las sanciones de ley más severas contra los autores de este hecho tan doloroso". Para los dueños del poder los autores eran nada menos que los agitadores que agonizaban en las cárceles.

En enero de 1967 fueron confinados varios dirigentes mineros al campo de concentración de Puerto Rico (Departamento de Pando). En agosto del mismo año se los trasladó a La Paz e inmediatamente fueron encarcelados en el penal de San Pedro, bajo la acusación de haber participado en la descomunal masacre de San Juan. Los mineros presos demostraron la falsedad de dicha acusación, esto porque en la fecha de la masacre se encontraban internados en una guarnición militar a más de mil kilómetros de distancia del escenario de los luctuosos acontecimientos. A pesar de lo expuesto y de haberse presentado como testigo de descargo al propio Ministro de Gobierno y como pruebas -los comunicados oficiales y recortes de prensa- la Juez Clara Torres (que demostró no tener nada claras las ideas), con la sinvergüenzura característica de los agentes al servicio del gobierno, rechazó la libertad de los trabajadores mineros, acusándolos de haber realizado "ataque en cuadrilla" a tropas del ejército en el mes de junio y calificando dicho acto como "delito común" ⁶.

7. Agitación estudiantil

A medida que crecía la protesta estudiantil se acentuaron las provocaciones del gobierno. La supuesta actividad pro-guerrillera en las ciudades fue utilizada para hostigar a la universidad. La FUL papeña denunció, el 4 de julio, que agentes de la DIC colocaron banderas rojas en el edificio de la UMSA. Esta sistemática campaña parecía estar destinada a preparar el terreno para hacer posible la intervención castrense en las casas superiores de estudio.

Pese a las advertencias y amenazas de las autoridades, el 4 de julio se realizó el anunciado cabildo abierto en la UMSA. Concurrieron bastante público y representantes laborales. Menudearon los ataques al gobierno. Las conclusiones aprobadas hicieron suyas las peticiones de los obreros y añadieron como novedad la exigencia de que renuncie Barrientos a la Presidencia (exigencia que será reiterada después por la derechista FSB). Cuando la masa se desconcentraba se produjeron choques de aquellas con las fuerzas policiales. La prensa habló de más de cuatro heridos. Con todo, el acto no alcanzó las proporciones esperadas. Los trabajadores mineros, basándose en las informaciones optimistas de los dirigentes estudiantiles, estaban seguros de que el cabildo daría la oportunidad para que todo el pueblo paceño saliese en defensa de los huelguistas y de la víctimas de la represión gubernamental.

El 6 de junio los universitarios de Cochabamba realizaron su propio cabildo. Los periódicos hablaron de 1.500 asistentes y de violentas arengas antigubernamentales. Ampliaron y concretizaron algunos aspectos de las peticiones de sus compañeros de La Paz: plazo de 48 horas para el retiro de tropas de los centros obreros y exigencia de renuncia de Barrientos y Ovando de sus cargos, tipificados como autores confesos del genocidio de los mineros. La manifestación que siguió al cabildo fue disuelta dos cuerdas antes de llegar a la plaza principal.

El movimiento político y la acción universitaria centraron su atención alrededor de la consigna de libertad de los confinados y del retorno a la vigencia de las garantías democráticas. La creciente presión popular arrancó al general Barrientos la promesa de una casi inmediata amnistía. El gobernante creyó oportuno hablar de sus inclinaciones pro-izquierdistas y anti-imperialistas. El estado de sitio fue suspendido el 2 de agosto, poco antes de los dos meses de su dictación, aunque es cierto que continuó la represión contra los elementos considerados como líderes de la oposición izquierdista.

La agitación estudiantil volvió a adquirir mucha importancia, se convirtió en el canal de expresión del repudio popular al desgobierno castrense, en la palanca de movilización de las masas y en el polo catalizador de las energías sociales que habían sido dispersadas por la bestial represión. El Ejecutivo puso todo su empeño en abatir este bastión de la resistencia popular y comenzó por minarlo internamente. Los fanáticos de la cruz y del escapulario se organizaron en una minúscula capilla barrientista y antiguerrillera y abusivamente hablaron a nombre de la masa estudiantil.

6- "Masas" No. 342, La Paz, 19 de marzo de 1968.

Los estudiantes muestran muchas facetas negativas. Partiendo de la evidencia de que por momentos, constituyen el sector más osado de la lucha y que más fácilmente se radicaliza, llegan a la conclusión de que sólo ellos pueden dirigir con éxito a la mayoría nacional, La arrogancia pequeño-burguesa no es obstáculo para que en los momentos críticos pongan en evidencia su inclinación natural hacia el compromiso y la capitulación. Por suerte que los elementos estudiantiles más avanzados maduraron políticamente en la adversidad y, por esto mismo, se despojaron de sus absurdas pretensiones. Buscaron aproximarse al proletariado, sabiendo que a éste le corresponde la dirección política del proceso revolucionario.

8. La lucha en las minas

La lección de estos acontecimientos a pesar de la masacre, los trabajadores persistieron en sus peticiones, debido a que éstas eran la expresión de sus necesidades más premiosas. En el reportaje publicado por IBEAS sobre las minas (27 de julio) se lee que "los trabajadores, al tiempo de levantar la huelga, no han renunciado a la reposición de salarios". Toda vez que los mineros tuvieron oportunidad de expresar sus deseos y su pensamiento reiteraron con energía sus reivindicaciones que fueron enarboladas antes de la noche trágica de San Juan.

A veces, en la última época, llegaron momentáneamente hasta las direcciones sindicales elementos amarillos, dependientes de la ORIT o de las organizaciones católicas, y, sin embargo, cediendo a la poderosa presión de las bases, aquellos se vieron obligados a hablar un lenguaje radical. En los lugares mismos de trabajo los obreros no se cansaron de reiterar sus exigencias de mejoras económicas, de libertad de los presos y de vuelta a la empresa de los trabajadores cesantes. Las peticiones y las protestas no se tradujeron, necesariamente, en huelgas ni acciones callejeras, las masas tenían que darse un respiro, llenar el vacío dejado por la dirección tradicional y reagrupar sus fuerzas.

La Comibol se resistió a dar paso incluso a las reivindicaciones más pequeñas, actitud que se ajustaba a la orientación gubernamental. El coronel Juan Lechín, que al decir de los marxistas estaba por encima del Ejecutivo y únicamente reconocía como a sus superiores a los personeros del BID y al embajador norteamericano, rechazó de plano la exigencia laboral en sentido de incluir en el aguinaldo anual el incentivo a la asistencia y otros beneficios menores, con el argumento que importaría convertir los bonos en salarios y, por tanto, inflar las incidencias sociales. Algo más, hizo saber que recontrataría únicamente a los que ostentasen inocencia en materia política y calculó que éstos no pasarían de diez.

El 26 de julio el oficialismo presentó a los periodistas a algunos elementos que decían ser portavoces de los mineros de siglo XX, era posible percatarse a primera vista que habían sido seleccionados por los agentes de la ORIT. Es cierto que pidieron "escuelas de sindicalismo que les ayuden a liberarse del extremismo", pero no tuvieron más remedio que demandar la satisfacción de las reivindicaciones económicas que habían sido formuladas por los extremistas. Estos visitantes casi nunca daban sus nombres porque sabían que a su vuelta a las minas serían hostilizados por sus sufridos compañeros que permanecían fieles a lo que dio en llamarse lucha antigorilista.

La prensa del 14 de julio publicó la noticia de que los mineros de Siglo XX, según comunicado firmado por el Comité de Huelga, reiteraron su pedido de libertad de los obreros detenidos, devolución del local sindical (en ese momento ocupado por efectivos militares) y formación de comisiones (parlamento, iglesia, prensa, Cruz Roja, etc) para que investigasen los sucesos de San Juan.

Es preciso volver a la finalización del movimiento huelguístico, que importó la imposición al Comité de Bases de las draconianas condiciones gubernamentales ⁷. El convenio de catorce puntos buscaba estrangular toda actividad de las organizaciones laborales.

El primer párrafo marginó de la empresa toda manifestación de proselitismo político y prohibió que se planteasen cuestiones políticas en las asambleas ("Toda asamblea será con carácter social y económico y se realizará en la forma establecida con previa autorización de la empresa")

La Comibol se comprometió (es el punto que obligó a algo a los empleadores) A reincorporar a sus trabajos a los obreros que fueron apresados y que mereciesen la absolución de la justicia ordinaria (punto 8). En el aparte décimo se reiteró que los obreros no tenían por qué inmiscuirse en los aspectos

7- "Presencia", La Paz, 10 de julio de 1967.

técnicos y administrativos de la empresa. La vieja disputa sobre si la gerencia puede o no, conforme a su capricho, despedir a sus obreros cuando crea conveniente encontró su solución en el convenio y, claro está, a costa de los sindicalizados. La empresa anunció que en el futuro retiraría a cualquier obrero que creyera conveniente (punto 13). Como cuadra en un campo de concentración, ningún obrero podía portar arma de fuego o dinamita (punto 12).

El documento fue íntegramente redactado por la empresa y los obreros se vieron obligados a firmarlo, pues por el momento no veían ninguna otra salida al conflicto. Huanuni, reaccionando ante la mentalidad ultimativista del coronel Lechín, persistió algunos días más en la huelga. La opinión pública se sintió ofendida y molesta por semejante "acuerdo" (lo exacto sería decir imposición).

Una asamblea de Siglo XX rechazó el documento de 14 puntos, a pesar de haber sido suscrito por los llamados representantes de base. Los asambleístas de Huanuni pusieron mayor énfasis en su rechazo.

La situación del gobierno se vio agravada porque simultáneamente a estos acontecimientos las organizaciones fabriles reiteraron su pedido de mejores remuneraciones.

Los conflictos docente-estudiantiles se elevaron a su punto culminante. Los maestros venían agitando la consigna del sueldo básico de novecientos pesos por mes desde su congreso de Potosí y los alumnos ganaron las calles buscando recursos económicos para la refacción de locales y dotación de mobiliario para las escuelas. Esta agitación desembocó en la huelga general de maestros que no pudo lograr sus objetivos. El 24 de julio la Federación de Estudiantes de Secundaria de La Paz rechazó el plan gubernamental de edificaciones escolares por considerarlo deficiente en extremo. Fue decretada la huelga y los alumnos del Colegio Ayacucho adoptaron medidas aún más radicales.

El Presidente Barrientos pidió a los maestros (27 de julio) desistiesen de su pedido de aumento de remuneraciones y el sueldo catorce. La conferencia económica extraordinaria del magisterio, después de conversar con el Presidente a sugerencia del dirigente Dávila, retiró todo el pliego económico (sueldo básico de 900 \$b- particularmente) para únicamente exigir el sueldo catorce o prima. Muy fácilmente y a cambio de nada fueron olvidados los acuerdos del congreso de Potosí; el Presidentese limitó a responder que el pliego sería considerado cuando mejorasen las condiciones económicas del país.

El general Ovando, que decidió la designación de Crespo Gutiérrez, hombre de la rosca, como Ministro de Defensa, reveló algunos aspectos de la política del Ejecutivo que se desarrolló en el futuro inmediato: romper el frente opositor interno, adoptando medidas que permitiesen ganar a la juventud, que se la consideraba "fuertemente influenciada por el comunismo" y auspiciar medidas de cooperación internacional en materia de lucha anti-extremista. Así se hizo público el sometimiento de la política interna a los dictados imperialistas. Barrientos dijo que uno de sus objetivos era procurar la intervención armada de Cuba por los gobiernos latinoamericanos.

Preocupado porque la resistencia popular no hubiese disminuido pese a las premeditadas masacres, el gobierno ensayó un nuevo viraje izquierdizante. Barrientos consignó en sus discursos el repudio a las ocultas intenciones de la derecha, pese a que el Partido Social Demócrata, cerebro de la rosca, se convirtió en el puntal más serio de su gobierno. Al reorganizar su gabinete dio a entender que se inclinaba abiertamente en favor de la izquierda: el PIR elevó a dos su cupo ministerial (Anaya apareció como Ministro de Minas y Petróleo) y el mismo Guevara se convirtió en Canciller. Después de mucho tiempo el presidente habló de su orientación antiimperialista, claro que su antiimperialismo no pasó de ser una palabra sin sentido:

"Y debo reafirmar una definición que ha hecho mi gobierno en forma rotunda: si bien nosotros somos antiimperialistas, pero estamos con la Alianza para el Progreso, porque en esta nueva oportunidad encontramos todas las posibilidades para poder cumplir un verdadero plan de gobierno"⁸.

No debe perderse de vista la declaración del Presidente Barrientos en sentido de que su gobierno permitiría la presencia del marxismo, "si éste se desenvuelve dentro del marco democrático".

En su mensaje al congreso de 1967 vuelve a su intento de dividir al país en demócratas y pro-comunistas, por encima de cualquier otra consideración partidista o ideológica. Salta a la vista su afán de llevar al

8- "Presencia", La Paz, 3 de agosto de 1967.

marco nacional lo ya logrado en el seno de las Fuerzas Armadas; se vuelve a magnificar el peligro de las guerrillas y se anuncia la posible intervención armada de los países vecinos (estuvo de moda referirse a la balcanización de Bolivia), para obligar a todos, moros y cristianos, a unirse alrededor de su figura. En ese documento volvemos a encontrar la curiosa definición de la línea supuestamente antiimperialista del gobierno castrense, a pesar de que no se niega que en materia económica el país se encontraba estrechamente vigilado por los organismos norteamericanos”⁹.

SIGLO XX: DESCOMUNAL CAMPO DE CONCENTRACIÓN

Desde la brutal masacre de San Juan, los centros mineros de Catavi y Siglo XX fueron declarados “zonas militares”; las fuerzas mercenarias del gorilismo no han abandonado aún esos distritos. El sector que ayer fuera el baluarte de las luchas sociales del proletariado boliviano se ha convertido en nuestros días en un virtual campo de concentración que en nada tiene que envidiar a sus similares organizados por los fascistas alemanes. Los trabajadores mineros son obligados a callar y a trabajar con la bayoneta en las espaldas; como si todo lo anterior fuera poco, los parásitos del gorilismo viven a costa de la COMIBOL, desmantelando las pulperías y dejando las migajas a los auténticos sostenes de la economía nacional.

En los últimos días los trabajadores mineros se han sorprendido al conocer la inaudita determinación de que todo pasajero con destino a aquellos centros mineros debe recabar la correspondiente autorización de la Segunda División del Ejército -cumple funciones de inteligencia- con asiento en Oruro.

La anterior determinación concluye por pisotear descaradamente uno de los derechos más elementales consignados en la Constitución Política del Estado, el del libre tránsito de cualquier ciudadano boliviano dentro de las fronteras nacionales.

Los ciudadanos que logran ingresar al distrito de Siglo XX son conducidos a las oficinas de la DIC, donde se les conmina a no conversar con los obreros y menos propalar noticias o discutir cuestiones políticas. En esta región minera ya no imperan las leyes y garantías democráticas del país, sino la voluntad despótica de los gorilas.

La voluntad gorila despótica ha convertido a los centros obreros en descomunales e inhumanos campos de concentración.

Debe añadirse que en esa zona impera un control policial extremadamente riguroso, esto en todos los campamentos tanto de Siglo XX como de Catavi. No exageramos al puntualizar que este régimen brutal alcanza a las poblaciones civiles de Llallagua, Uncía, etc.

(De “Masas”, No. 560, L a Paz, 24 de julio de 1969).

9- Gral. René Barrientos Ortuño, “Mensaje al H. Congreso Nacional”, La Paz, 1967.